


PUEBLOS ORIGINARIOS

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11289-07

REFERENCIA	Modifica la Constitución Política de la República, con el objeto de reconocer a los pueblos originarios y garantizarles cargos de diputados y senadores
INICIATIVA	Moción de los diputados Sra. Muñoz y Sres. De Urresti, Navarro, Quintana y Quinteros
ORIGEN	Cámara de Diputados
COMISIÓN	De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
INGRESO	21 de junio de 2017
ARTICULADO	Artículo único, que modifica el artículo 15 de la Constitución Política y le agrega un artículo 3° bis

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Se trata de una nueva iniciativa para otorgar estatus constitucional a los pueblos indígenas, garantizándoles ciertos bienes, como los derechos de agua y tierras, así como un número de escaños en el Congreso Nacional. La principal objeción que se debe formular es que el concepto de pueblo está enfocado hacia el ámbito internacional como sujeto de derecho a la autodeterminación, lo que significaría el riesgo inminente de una escisión del concepto unitario de República e incluso, eventualmente, del territorio nacional.

Por otra parte, la reserva de cuotas para cargos parlamentarios y también de otros niveles a favor de los pueblos originarios, constituye un elemento que desconfigura la proporcionalidad que se ha buscado en la representación popular. Es un elemento extraño en el diseño democrático y solo se sustenta en una arbitrariedad sin justificación. Por lo demás han existido parlamentarios de origen indígena (concretamente mapuche) sin necesidad de establecer cuotas que los privilegien 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

1. Se declara el carácter multicultural de la nación chilena.
2. Se reconoce a los pueblos indígenas:
 - Su preexistencia étnica y cultural.
 - Su derecho a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones culturales.
3. Los órganos del Estado deberán garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación intercultural.
4. La ley deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y comunidades indígenas
5. La ley deberá reservar escaños en el Congreso Nacional para diputados y senadores de pueblos indígenas (no indica cuántos) ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

A dos materias centrales se refiere la reforma constitucional propuesta: reconocimiento como pueblo y cuotas de participación política.

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL

La primera proposición del proyecto de reforma constitucional consiste en reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. De ahí que corresponda referirse al concepto de pueblo aplicado a tales comunidades, aspecto que no es primera vez que se aborda, por tratarse de una materia recurrente, que una vez más se ha puesto en discusión.

Desde varios años, y especialmente, desde la campaña presidencial de Patricio Aylwin, las comunidades indígenas han estado tras un reconocimiento constitucional de su situación como pueblo, o al menos, así se ha sostenido por los promotores de iniciativas destinadas a otorgar ese reconocimiento, como asimismo, por algunos dirigentes del mundo indígena.

Si bien mucho se ha dicho y analizado sobre el problema de las comunidades indígenas, el proyecto que ahora se presenta aborda nuevamente este concepto, que tiene una innegable proyección en el derecho internacional.

Sin embargo, antes de hacer una reflexión sobre ese término, conviene señalar que los problemas que experimentan las etnias denominadas originarias provienen principalmente de su condición de pobreza, y desde ese punto de vista, merecen que el Estado provea lo necesario para ir en su ayuda, pero sin olvidar por ello a las demás personas que, sin pertenecer a una etnia nativa, también sufren esta misma condición.

Un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, como se propone, no va a traer solución alguna al problema de fondo, y en cambio, puede generar, una fuerte presión independentista o autonómica en la región (que ya parece insinuarse), lo que traería un grave problema de gobernabilidad.

Mientras el concepto de población corresponde al vocabulario de la demografía o estudio de los distintos grupos humanos que comparten un territorio nacional unitario, el de pueblo, en cambio, supone el ejercicio a la autodeterminación, lo que supone, a su vez, el establecimiento de una frontera reconocida por el derecho internacional. Por eso el reconocimiento de los pueblos indígenas es una materia compleja que requiere de los mayores antecedentes para su discusión.

Suele decirse que a los dirigentes indígenas y demás personas interesadas en el reconocimiento constitucional, no les satisface el reconocimiento como población indígena y por lo tanto ponen sus esperanzas en ser reconocidos como pueblos.

Se resumirá, entonces, los principales comentarios que merece la expresión “pueblo” en relación con el grado de autonomía que dicho término supone.

Como se señala en el artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a sí mismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

Para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio económico recíproco así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia (artículo 1° del mismo Pacto).

En relación con lo anterior, el Convenio 169 de la OIT que se aplica a los “pueblos tribales”, en su artículo 1, N° 3, reconoce un problema que puede acarrear la utilización de la palabra “pueblos”, al señalar que “La utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”. Ello permite entender que en otros instrumentos internacionales o nacionales que no contengan esta prevención, el concepto de pueblo tiene precisamente el alcance del pacto Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Con la reforma constitucional propuesta, los pueblos indígenas adquirirían el carácter de sujetos de derecho internacional público, toda

vez que una norma internacional (el “Pacto”) les reconoce esa calidad en directa relación con el derecho interno.

Introducir el elemento “pueblo” o “pueblos” dentro del ordenamiento jurídico, especialmente a nivel constitucional, se proyecta inevitablemente una potencial autonomía de un grupo humano al interior del Estado. La circunstancia accidental de utilizarse el término en singular o plural no incide en la prevención que se está formulando.

En este sentido, la proposición produciría una colisión frente al principio de igualdad que informa nuestro ordenamiento constitucional desde su artículo 1°: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Las personas que tienen un origen étnico son chilenos que tienen los mismos derechos, obligaciones y limitaciones que afectan a todas las demás personas, de raigambre tradicional o provenientes de procesos de inmigración alemanes, italianos, españoles, por nombrar solo algunos.

Si como consecuencia de la reforma propuesta, se va a generar una legislación que dé mayores beneficios o derechos a los integrantes de comunidades indígenas (lo que en alguna medida ya ha ocurrido), se vulnera un principio básico del Capítulo I de la Constitución, que contiene normas fundamentales, y que se las ha hecho funcionar como criterio de interpretación para precisar el sentido y alcance de otras normas constitucionales. Ello acarrearía perjuicios adicionales, en el ordenamiento jurídico constitucional, a los que se podrían derivar del concepto de “pueblo” ante el derecho internacional público.

Recuérdese que el reconocimiento de “pueblos” que se viene proponiendo, se introduciría en un

nuevo artículo 3° bis de la Constitución, que se encuentra en el aludido Capítulo I.

Finalmente, y en otro ámbito de ideas, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, como antes se señaló, no es una prioridad para los propios indígenas, sin perjuicio del interés que ello tenga para algunos dirigentes.

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Por otra parte, asegurar una cuota de representantes de etnias originarias en el Parlamento mediante una disposición constitucional, niega otros principios del régimen democrático que están amparados por garantías constitucionales, como es el principio de no discriminación, lo que se suma a las diferenciaciones consagradas constitucionalmente, que se derivarían de la modificación al Capítulo I, de la Constitución, como se indicó recién. Es decir, se introduciría otra colisión entre valores constitucionales.

Otorgar una ventaja a ciertos candidatos por la sola circunstancia de pertenecer a un pueblo indígena, constituye una forma de desequilibrar el libre juego del sistema político, pues la elección de autoridades mediante sufragio tiene su razón de ser en que el electorado debe ser capaz de elegir a las mejores personas para cada cargo, independientemente de su calidad

de hombre o mujer, de su raza o de cualquiera otra característica accidental (en función del régimen electoral) como es la pertenencia a una etnia.

De lo que se puede observar en publicaciones de prensa, reportajes y algunos datos estadísticos, la elección de representantes étnicos no es una preocupación indígena; de hecho, si quisieran tener tales representantes (y los han tenido), podrían elegirlos sin otra limitación que las generales del sistema electoral. Por lo demás, los electores indígenas podrían perfectamente jugar un papel preponderante en los distritos 22 y 23, que eligen en la suma de ambos, 11 diputados, con la nueva distribución para la aplicación del sistema de cifra repartidora. Pero el hecho es que en el pasado ha habido representantes de la etnia mapuche en los antiguos distritos 51 o 52 y sin necesidad de consagrar una reserva constitucional al respecto.

Entonces ¿por qué no se organizan y juegan un papel decisorio en la elección, votando por candidatos de su etnia? La respuesta es simple: no es una prioridad de los mapuche contar con diputados mapuche; quienes instan por una norma de privilegio como la que se viene proponiendo, son quienes tienen aspiraciones políticas que no han encontrado eco en los votantes de esa zona, y por la vía de asegurar un número de diputados “étnicos”, podrían tener acceso al parlamento; pero a costa de alterar el libre juego de las fuerzas democráticas del electorado.

Asegurar cupos para diputados “étnicos” se opone al principio de no discriminación, que también tiene consagración constitucional, perjudica injustificadamente a quienes no pertenecen a una etnia, altera el sistema

democrático y solo beneficia a quienes no son capaces de concitar apoyo electoral dentro del sistema general vigente para todas las fuerzas políticas del país.

Esta iniciativa es una medida que dice buscar la llamada igualdad efectiva de las personas a través de una diferenciación positiva, es decir, discriminando con respecto al resto de la población.

DATOS DE OTROS PAÍSES

Viendo la experiencia que han tenido otros países en su aplicación (como a los afroamericanos en EE.UU.) revela que se trata de una práctica que ha sido objeto de intensas polémicas en la sociedad civil y resistida por buena parte de ella, al causar un daño indirecto sobre quienes no integran los colectivos objeto de la acción positiva. Cabe plantearse si en Chile resulta justificada la aplicación de cuotas para elegir representantes por su nacimiento y no por sus ideas, conocimientos o aporte a la sociedad.

En esta misma línea Donoso (2009), señala que “existe evidencia abundante respecto a los efectos negativos de la discriminación positiva, tanto sobre los propios beneficiados por ella como sobre el resto de la población. Entre estos efectos destacan sentimientos de baja autoestima entre beneficiados y un reforzamiento de los estereotipos negativos que tiene el resto de la población con respecto a aquellos, efectos

que ambos contradicen el espíritu mismo de la discriminación positiva. Consecuentemente, algunos autores (por ejemplo Mitra, 1990) han sostenido que la discriminación positiva debe ser siempre una política específica y acotada en el tiempo”.

Esta combinación, de cuotas exclusivas y además no acotadas en el tiempo, sólo puede tender a mantener o agravar los problemas indígenas desde el punto de vista del bienestar. Podría aumentar la discriminación hacia este sector de la población.

Además de cargos exclusivos para concejales y consejeros nacionales, se plantea la inclusión de escaños exclusivos para los pueblos indígenas. Ello va a incidir en la reforma constitucional de la cual se deriva que serán 155 diputados y 50 senadores, dentro de los cuales se deberían contabilizar los cupos indígenas. Más allá de la discusión sobre la utilidad de tener escaños exclusivos para una minoría, hay que detenerse en la discrecionalidad de la medida, la que tampoco contiene un límite de tiempo.

Los escaños exclusivos de representación indígena que se plantean para el Senado y Cámara de Diputados, no es proporcional al número de habitantes indígenas del país, por lo que estarían siendo sobre-representados.

En el caso de Nueva Zelanda, existen dos formas de participación de los grupos indígena maoríes en el Parlamento. En Primer lugar la representación que se efectúa a través de la elección de parlamentarios de esta etnia en los siete electorados maoríes existentes y la segunda es a través de la participación en las elecciones abiertas. Los votantes maoríes tienen la posibilidad de registrarse en un padrón

maorí, que elige a los siete parlamentarios, o en el padrón general de votación. Pero no pueden votar en ambos.

ALGUNOS PORCENTAJES

Chile es uno de los países de la región con menos población indígena. Según datos del Censo Nacional de Población 2002 (aún no se conoce los resultados del Censo 2015), la población en Chile es de 15.116.435 habitantes, de los cuales 692.192 personas (4,6%) dijeron pertenecer a uno de los ocho pueblos indígenas considerados en el instrumento censal.

Dada la antigüedad del instrumento de medición, podemos hacer el ejercicio con los datos de la Encuesta CASEN 2015, donde se ve un crecimiento de 1.585.680 personas (9%) que dijeron pertenecer a un pueblo indígena.

¿QUIÉNES SON INDÍGENAS?

Para satisfacer las demandas indígenas, se dictó la ley N° 19.253. En el marco de esta ley, los individuos para definirse como indígena poseen un amplio espectro de posibilidades, que van desde la descendencia directa de padre y madre indígena, o cónyuge indígena y hasta la intención de autodefinirse como indígena, siempre que acrediten practicar ciertos rasgos de la cultura. En consecuencia, la condición de indígena no es sólo privativa de quienes descienden directamente de las respectivas etnias.

Dada la facilidad para declararse indígena, puede suceder que al tener cuotas exclusivas, éstas sean utilizadas por operadores políticos, que poseen mayor experiencia y acceso a financiamiento para las campañas, entregándoles ventajas, y pudiendo perderse, en consecuencia, candidatos con reales agendas indigenistas.

Cuadro N° 1

Pertenencia a algún pueblo indígena
en relación al total de la población nacional

	N° personas	% del pueblo
Rapa nui	5.065	0,3
Aymara, Quechua, Atacameño, Coya y Diaguita	245.736	15,5
Mapuche, Kawesqar y Yamana	1.334.879	84,1
TOTAL Población Indígena	1.585.680	9,0

Fuente: CASEN 2015

LAS REALES NECESIDADES

Finalmente, como se está legislando en beneficio de los pueblos indígenas es necesario saber que creen ellos son sus principales problemas y necesidades. Como se insinuó en párrafos anteriores, se refleja en la Encuesta CEP 2016, que los mapuche, por ejemplo, no identifican como sus principales problemas el aumento de la representación política. Por el contrario, tal aspiración se ubica en el séptimo lugar de doce. La restitución de tierras ocupa el primer lugar de las preocupaciones y el reconocimiento Constitucional se ubica en segundo lugar, y en quinto y sexto lugar se ubican educación y pobreza respectivamente. Es decir, las prioridades de la mayoría están enfocadas en demandas socioeconómicas y no necesariamente de tipo político.

Por otra parte, se aprecia en la encuesta del CEP 2016, que la mayoría de los mapuche tanto urbanos como rurales se sienten plenamente integrados con un 73% y un 82% respectivamente

—y un posible efecto de una normativa de cuotas exclusivas podría generar mayor rechazo hacia los pueblos originarios—.

Además, la experiencia internacional ha mostrado que las cuotas más efectivas son el fomento a la participación bajo el impulso de incentivos a los partidos, asociados a cuotas voluntarias, matching funds o sistemas de primarias, donde a través de decisiones libres, impulsadas por estos incentivos, se genera mayor participación de los representantes de la sociedad, pero finalmente son los ciudadanos los que toman la decisión de dar forma democrática a las aspiraciones, sin imponer por la fuerza de la ley la elección de un candidato por su etnia, en vez de la fuerza de sus ideas.

Al final, no se debe olvidar que el desafío más grande para la sociedad chilena es ir progresando en integración y respeto hacia todas las comunidades indígenas que componen el país, lo que no requiere una reforma constitucional ni correr el riesgo de la calificación de pueblos que se proyecta ante el derecho internacional ■■■

V. COMENTARIOS DE MÉRITO EN ESPECÍFICO

TEXTO DEL PROYECTO DE REFORMA	COMENTARIOS
Artículo único. <i>Para incorporar las siguientes enmiendas en la Constitución Política de la República.</i>	
1.- <i>Incorpórese el siguiente artículo 3 bis¹ nuevo en el Capítulo I.</i>	
Art. 3 bis.- <i>La nación chilena es multicultural.</i>	Se incluye en el texto propuesto una remisión al concepto multicultural manifestado por un proyecto de la Presidenta Bachelet (boletín 5427-07) presentado en octubre de 2007 y retirado por ella misma en noviembre del mismo año.
	<p>El concepto de multiculturalismo a que aluden en ese proyecto es, en resumen, lo siguiente:</p> <p>“El reconocimiento de la diversidad de nuestro país debe comenzar con visibilizar todas nuestras diferencias culturales. Diferencias que comienzan con el pueblo al que pertenecemos y con la circunstancia de nuestra vida. El reconocimiento y respeto de nuestro origen, de nuestras culturas, de nuestras diferencias sociales, culturales y religiosas, no hace más que enriquecernos como sociedad.</p> <p>Todos trabajamos por el mejor futuro de este país que nos cobija, todos buscamos su estabilidad política y prosperidad económica. Pero nuestro futuro y presente no puede olvidar su pasado, no podemos saber donde vamos sino sabemos de donde venimos. El camino trazado por esta República deberá llegar a</p>

¹ Para facilitar los comentarios se ha desglosado el inciso primero (véase el texto íntegro más adelante en el párrafo VII).

TEXTO DEL PROYECTO DE REFORMA	COMENTARIOS
	<p>sus doscientos años respetando y valorando a todos sus hijos e hijas sin distinción de razas y culturas.</p> <p>De ahí que la reforma proponga, manteniendo la unidad de la nación, reconocer la diversidad cultural de ésta” (fundamentos de la moción).</p> <p>Cabe señalar que el multiculturalismo es, según el Diccionario RAE, la convivencia entre diversas culturas. Pues bien, así entendido este término, que es su alcance correcto según su significado natural y obvio, se concluye que se trata de un hecho que se comprueba mediante la realidad y no una imposición de la norma jurídica, a pesar de que en otros países de ha seguido un camino como éste o similar.</p> <p>Es decir, habrá o no multiculturalismo en la medida que haya o no convivencia entre distintas culturas, sin que sea necesario que la Constitución lo declare así. Por otra parte, al decir convivencia, se entiende que tiene un carácter armónico, lo que dada la situación de violencia en la Araucanía, no resulta consistente con una declaración inserta en el texto constitucional.</p> <p>¿Qué sentido tiene, entonces, introducir ese concepto en la Constitución, como se propone? Simplemente relacionarlo con el segundo aspecto central del proyecto, que es la reserva de escaños en el Congreso. Se trata de aspiraciones políticas, que pueden ser legítimas (ya que cualquiera puede optar a un cargo de elección popular cumpliendo los requisitos), pero no es justo que, para lograrlo, se contradigan otros preceptos constitucionales fundantes del sistema democrático, como ya se ha señalado.</p>
<p><i>El Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas indígenas</i></p>	<p>La preexistencia étnica es otro hecho histórico que no tiene por qué reflejarse en la Constitución: cuando llegó el elemento Europeo ya había población indígena en el territorio que después constituyó la</p>

TEXTO DEL PROYECTO DE REFORMA	COMENTARIOS
<p><i>a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones culturales. Los órganos del Estado deberán garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación intercultural.</i></p>	<p>Capitanía General del Reino de Chile, y después la República de Chile.</p> <p>Mucho de lo que constitucionalmente se le impone como obligación al Estado, ya está contenido en otros textos de nivel legal, sin necesidad de constitucionalizar una materia que, en concepto del anterior gobierno de la Presidenta Bachelet y materializado en un proyecto del reforma, fue preferible retirar de tramitación.</p>
<p><i>La ley deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y comunidades indígenas.”.</i></p>	<p>Este otro precepto constitucionaliza un bien de carácter económico que está igualmente garantizado en términos generales y para todas las personas como son la propiedad de la tierra y de las aguas. Otorgar una protección especial a una determinada categoría de chilenos, los indígenas, vuelve nuevamente a chocar con el tratamiento general y de igualdad ante la ley que se debe dar a toda la población, sin distinción de origen étnico.</p>
<p>2.- Para incorporar el siguiente inciso final en el artículo 15:</p>	
<p><i>La ley orgánica respectiva establecerá un sistema de escaños reservados de pueblos indígenas para ser electos Diputados y Senadores.</i></p>	<p>Sobre este punto, véase más arriba, el comentario de carácter general.</p>

VI. OBSERVACIÓN FORMAL

El texto del proyecto de reforma constitucional que se presenta, contiene una característica inusual, como es, que se remite en nota a pie de página a un mensaje presidencial de la Presidenta Bachelet de octubre de 2007, al cual ya se hizo referencia así como a textos constitucionales de Colombia y Argentina. Jamás hasta ahora se ha visto un texto constitucional o legal que, originalmente, se presente con notas a pie de página para determinar su sentido y alcance. Un texto legal debe entenderse por sí mismo, sin perjuicio de las discrepancias en la interpretación que siempre se pueden producir. Por esta razón se asume que en opinión de los autores de la moción solo se trata de una información adicional al proyecto de reforma constitucional, sin la intención de que, si se aprobara, el texto fuera adicionado con notas a pie de página.

Con todo, para mayor información, cabe señalar que la primera nota a pie de página se refiere al concepto de multiculturalidad contenido en el aludido proyecto de 2007, cuya parte sustancial se reprodujo textualmente como comentario al nuevo artículo 3° bis (ver más arriba en la columna respectiva).

La otra nota a pie de página se refiere a una forma más bien indirecta de reconocimiento constitucional de las etnias originarias en las Constituciones de Colombia y Argentina, que se citan a continuación:

Colombia:

“Artículo 7°. *El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.*

Argentina:

“Artículo 75.- Corresponde al Congreso:

17. *Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.*

Como se observa, especialmente en el caso de Argentina, no se produce un reconocimiento directo de los pueblos indígenas, sino que se deja mandatado al Congreso para hacerlo, lo que dependerá de circunstancias políticas y de prudencia legislativa, hacerlo o no ■■■

VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo único. Para incorporar las siguientes enmiendas en la Constitución Política de la República.

1. Incorpórese el siguiente artículo 3 bis nuevo en el Capítulo I.

“Art. 3 bis.- La nación chilena es multicultural¹. El Estado reconoce la preexistencia étnica² y cultural de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de los pueblos, comunidades y personas indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, idiomas, instituciones y tradiciones culturales. Los órganos del Estado deberán garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación intercultural. La ley deberá proteger las tierras y derechos de aguas de las personas y comunidades indígenas.”.

2. Para incorporar el siguiente inciso final en el artículo 15²:

“La ley orgánica respectiva establecerá un sistema de escaños reservados de pueblos indígenas para ser electos Diputados y Senadores.”.



1 [Nota incluida en el texto de reforma constitucional propuesto] cf. Mensaje Boletín 5427-07.

2 [Nota incluida en el texto de reforma constitucional propuesto] cf. Arts. 7-10 CP Colombia; CN Argentina;

2 Artículo 15 vigente:

Artículo 15.- En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.

Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución.

[...].